



Poder Judicial de la Nación

## TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE MAR DEL PLATA

Mar del Plata, 10 de abril de 2024.

### AUTOS Y VISTOS:

Para resolver acerca del planteo introducido por la fiscalía de juicio en los autos **FMP 270/20147 /TO1 "GALLINAL, JOSÉ LUIS Y OTROS S/INFRACCIÓN LEY 24.769 QUERELLANTE: AFIP-DGI"** del registro de la vocalía nro. 1 de este tribunal, luego de haber deliberado por los medios tecnológicos disponibles, arribamos al acuerdo unánime; y,

### CONSIDERANDO:

#### I.

Que el Sr. fiscal ante la instancia Dr. Juan Manuel Pettigiani, en oportunidad de responder la vista de citación a juicio en los términos del art. 354 del CPPN, interpuso la excepción de falta de acción respecto de las conductas calificadas en la instancia de origen como asociación ilícita tributaria que trajeron a juicio a Eduardo Miguel Aracil, Pedro Eugenio Del Buono, Mauricio Héctor Kennis, José Luis Gallinal, Micaela Aracil, Miguel Àngel Gabbin, Mara Labaroni, Eladio Walter Aquino, Roberto Obertti, Emilio Manuel Carabajal, Horacio Gutemberg González y Gloria Graciela García quienes fueron requeridos a juicio por integrar tal organización delictiva, al



#37386640#401039135#20240410120311620

menos desde el año 2003 y hasta el 2014, con el objeto de evadir tributos e impuestos nacionales mediante distintas maniobras intentando disfrazar la verdadera capacidad contributiva de los causantes valiéndose de un entramado de personas jurídicas relacionadas con el manejo financiero y comercial de la explotación denominada "*Complejo Sobremonte*" (art. 15 inciso "c" de la Ley 24.769 y 339 inciso "2" del CPPN).

Tuvo a bien aclarar que conforme surge de los documentos acusatorios acercados a la causa tanto sus pares de la instrucción como los representantes de la querella Administración Federal de Ingresos Públicos, en adelante AFIP, entendieron que la supuesta organización delictiva en trato operó, como advertimos en el párrafo anterior "*desde el año 2003*" y resultó ser ese momento el que definió la suerte del planteo del Sr. fiscal de juicio: al no encontrarse para esa fecha contemplada como delito la figura penal en trato.

Para fundar su pedido de apartamiento definitivo de los causantes por el injusto penal objeto de estudio, entendió aplicable al caso, el criterio delineado en un precedente de este tribunal -con otra integración y en forma unipersonal- que





## Poder Judicial de la Nación

### TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE MAR DEL PLATA

recogió la postura introducida por esa parte en las alegaciones de cierre por similares sucesos objeto de juzgamiento en el debate llevado a cabo en los autos FMP 8000/2014/TO1 "Vadillo Juan Carlos y otros s/ Evasión agravada tributaria. Querellante: AFIP-DGI".

En ese fallo, se absolvió a los allí acusados tras considerar atípicos los sucesos por los que fueron requeridos a juicio cuyo encuadre legal resultaba, como en el caso bajo estudio, una organización delictiva tributaria; argumentos que replicados aquí por la acusación pública concitan nuestra atención.

#### II.

A su turno, los apoderados de la querella AFIP propiciaron el rechazo de tal planteo al entender que la citación a juicio no resultaba el momento oportuno para debatir las cuestiones de fondo ensayadas, proponiendo se difiera su tratamiento para una etapa posterior a la que se encuentra en trámite la causa, pudiendo, a todo evento, ser introducida como cuestión preliminar al inicio del debate oral.

#### III.

Comenzando con las respuestas del elenco de defensores, la Dra. Carolina Ciordia señaló que el



planteo de la fiscalía resultaba procedente en razón de ser la primera oportunidad en la que se “controla la imputación penal y la requisitoria de elevación a juicio que le presentan las partes acusadoras. Es decir, el titular de la acción y quien debe acusar, no tuvo oportunidad previa de deducir la excepción interpuesta. Por dicho motivo, es absolutamente procedente el planteo, tanto de la fiscalía como de es [l]a defensa, contrariamente a lo sostenido por la parte querellante”; invocó el art. 279 del nuevo ordenamiento procedimental -aún no vigente- que “propicia la resolución anticipada de excepciones, previo al ofrecimiento de prueba y con anterioridad al auto de apertura a juicio”.

Apuntó que “[l]os representantes de la AFIP, también hacen referencia a la cantidad de años que lleva la causa en trámite, como fundamento a fin de no tratar la excepción planteada” enfatizando que “los 10 años que lleva esta causa, no pueden ser utilizados como argumento en perjuicio de los imputados, quienes han debido soportar la pena y severas medidas





## Poder Judicial de la Nación

### TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE MAR DEL PLATA

*cautelares durante todo este excesivo plazo, no siendo esta dilación temporal además, atribuible a [su] defendido".*

*Y que de acuerdo con la tesitura del Sr. Fiscal a la cual adhirieron las defensas en su totalidad "la figura de la asociación ilícita tributaria no puede ser imputada, ya que la misma sólo resultaría aplicable a las conductas que encuadren en la misma a partir del 31 de enero de 2004 (fecha en que entró en vigencia la ley 25.874) y, por el contrario, la investigación -llevada a cabo por más de 10 años- habría demostrado que el presunto acuerdo de voluntades llevado por los imputados para formar parte de una asociación ilícita fiscal (momento consumativo), se retrotrae al año 2003, fecha en que el hecho no estaba tipificado".*

Invocó la doctrina del Máximo Tribunal que fluye del precedente "Muiña" (340:549) por cuanto establece el alcance del principio de aplicación de la ley más benigna (art. 2 del Código Penal) respecto de los delitos permanentes.

#### IV.



En su hora, habló el Sr. defensor Dr. Marcelo Savioli Coll considerando que *"resulta ser este el momento oportuno para introducir el planteo como de previo y especial pronunciamiento, ya que es la primera oportunidad en la que el Sr. Fiscal de Juicio analiza y controla el trámite del proceso, considerando con sólidos fundamentos que carece de acción para acusar."*

Pidió que se otorgue trámite de previo y especial pronunciamiento haciendo lugar a la excepción de falta de acción instaurada por el Sr. Fiscal de Juicio respecto de la cual adhirieron en un todo a sus fundamentos y petición, por atipicidad de la conducta imputada y dictando el sobreseimiento de sus defendidos *"todo lo que resulta una derivación razonada del derecho vigente aplicable al caso, respetuoso del régimen de derechos garantizados por el denominado Bloque de Constitucionalidad y de estricto apego a la objetividad que debe guiar tanto la función de la acusación pública como de su juzgamiento"*.

Remarcó que si se insistiera en que la imputación del art. 15 inc. "c" conservara su vigencia, lo cierto es que una interpretación de tal





## Poder Judicial de la Nación

### TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE MAR DEL PLATA

naturaleza se desvanece a poco de que se repara en que la conducta contiene un elemento normativo del tipo que consiste en que *"habitualmente esté destinada a cometer cualquiera de los delitos tipificados en la presente ley"*.

En el caso la figura en cuestión, según escribió, es autónoma pero no independiente, toda vez que se encuentra directamente relacionada con la verificación de conductas enderezadas a la comisión de otros delitos previstos en la Ley Penal Tributaria, lo que en autos ya no se verifica. En tal contexto no es posible pretender llevar adelante un reproche "autónomo" en los términos de esa normativa, pues si bien en la asociación ilícita lo que se castiga es la mera pertenencia a una organización, en la fiscal no puede negarse la necesaria vinculación de base que tiene con las obligaciones fiscales sustantivas, como establece el mismo tipo penal.

#### **v.**

A su turno, la Sra. defensora pública oficial ante este tribunal, Dra. Natalia Eloisa Castro, por su asistidos Micaela Aracil y José Luis Gallinal, compartió los argumentos vertidos por sus pares de la defensa particular tras considerarlos



razonables y debidamente fundados no sólo en los hechos o antecedentes mencionados al inicio del escrito, sino en el derecho aplicable, postura justificada en una profusa literatura jurídica específica vinculada a la temática y, ante todo, consustanciada con un precedente de este mismo Tribunal en la causa caratulada "Vadillo, Juan Carlos y otros s/evasión agravada tributaria. Querellante: AFIP-DGI" que tuvo a bien invocar el titular de la acción pública en su pedimento.

#### **VI.**

Sentados los antecedentes del caso y asegurado así el contradictorio en este punto, habremos de decir que la cuestión traída al acuerdo que concita nuestra atención en esta etapa del proceso esto es, antes del inicio del debate, resulta procedente su tratamiento, en tanto el pedido de sobreseimiento introducido por el acusador público en el ejercicio de su ministerio -sin perjuicio del *nomen iuris* utilizado- que se sustenta en uno de los supuestos especiales previstos por el art. 361 del ritual a través de la aplicación de una ley penal más benigna.







## Poder Judicial de la Nación

### TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE MAR DEL PLATA

Esa solución aparece como la alternativa adecuada en nuestro ordenamiento procesal toda vez que evita la realización de un juicio innecesario y el consecuente desgaste jurisdiccional que tal actividad implicaría.

En efecto acerca de esta solución alternativa se expidió el tribunal del recurso en cuanto "[s]i bien resulta atendible considerar que la enunciación del art. 361 del CPPN no es meramente taxativa, lo cierto es que para recurrir a ese procedimiento se torna imprescindible que la situación jurídica aparezca como evidente -como ocurre en el presente caso- y que no resulte necesaria la concreción del debate o se modifiquen los propios presupuestos normativos de la imputación. En esto reside el núcleo de significación jurídica del mecanismo [...]" (Sala II de la CFCP 12.635 "Méndez, Nélida Argentina s/ casación", reg. 17.980 citado en el fallo de la Sala I CFP 11352/2014/TO1/26/CFC10 "Fernández de Kirchner, Cristina y otros s/recurso de casación"; CFP 3732/2016/TO1/34/CFC19 Registro Nro. 1078/23).

Ahora bien, yendo en concreto al precedente local, citado por el Sr. fiscal general como



fundamento medular de su renovada teoría del caso FMP 8000/2014/T01 "Vadillo Juan Carlos y otros s/ Evasión agravada tributaria. Querellante: AFIP-DGI", criterio al que adherimos, fallo de este Tribunal -con distinta integración y en forma unipersonal- se estableció que el momento consumativo para ese tipo penal -de carácter permanente- resulta "*el comienzo de la actividad voluntaria*", es decir, en el caso bajo análisis el inicio de la presunta superposición de sociedades para ocultar a los reales beneficiarios de la explotación comercial "*Complejo Sobremonte*", siempre de acuerdo con la tesis de los acusadores públicos y privados "*se remontaría al año 2003 con la creación de la firma: FRODDO S.A. (CUIT N° 30-70814780-6)*", de lo que se colige que si los sucesos que los trajeron a juicio -en lo que aquí atañe- se habrían cometido antes de la entrada en vigencia de la Ley 25.874 - 31 de enero de 2004- por ende, no resultarían punibles.

Veamos.

Estando a los documentos acusatorios se les reprocha a los causantes haber integrado una asociación ilícita en el período comprendido entre los años 2003 y 2014 con el objeto de "*evadir tributos e*





## Poder Judicial de la Nación

### TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE MAR DEL PLATA

*impuestos nacionales mediante la utilización de distintas maniobras y así disfrazar la verdadera capacidad contributiva de los encausados, que aparecían interactuando con una serie de firmas -tales como "Froddo S.A.", "Prodemin S.A.", "South Beat S.A.", "Destination Boulevard S.A.", "Mangiato S.A."y "Repque S.A."-; todas ellas radicadas en diversas jurisdicciones, con diferentes domicilios fiscales e integrantes, pero directamente relacionadas con el "Complejo" [Sobremonte], en lo concerniente al manejo financiero y comercial del mismo".*

Sobre el tópico, resulta atendible la postura del Sr. Fiscal General ante esta instancia en la discrepancia con sus pares de la instrucción y los representantes de la AFIP, al postular que los comportamientos reprochados a los acusados, catalogados en la instancia de origen como asociación ilícita tributaria, no tenían encaje legal alguno, en tanto la asociación ilícita tributaria como delito se incorporó en nuestro ordenamiento jurídico mediante la Ley 25.874 del 17 de enero de 2004, publicada el día



22 de ese mismo mes y año, por tanto solo aplicable a conductas conformadas a partir de su entrada en vigencia.

Es que, en este tipo de delitos permanentes, es decir, que se prolongan en el tiempo, el criterio más adecuado para interpretar la normativa aplicable es tomar como momento consumativo el comienzo de la actividad voluntaria salvo que una ley posterior fuera más benigna: en el caso bajo estudio, la convergencia de voluntades del acuerdo conforme lo postularon los acusadores en su tesis inculpativa fue en el año 2003; a la luz de lo dicho en el párrafo anterior, la conclusión no pudo ser otra que su atipicidad dado que no eran conductas punibles.

A propósito de los delitos permanentes, la fiscalía trajo conceptos vertidos en destacada doctrina los que trasladados a los hechos objeto de análisis sentaron el criterio dirimente para reforzar el planteo no inculpativo del caso sobre estos episodios del *iter criminis* que propone la fiscalía ante la instancia.

El tratamiento del caso permite extraer los lineamientos del fallo invocado por esa parte los que aparecen aplicables al caso bajo estudio.





## Poder Judicial de la Nación

### TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE MAR DEL PLATA

Nos referimos a la causa nro. 2965/09 del registro del Tribunal Oral Federal de La Plata.

Allí se afirmó que en los delitos permanentes *"la actividad consumativa no cesa al perfeccionarse el delito, sino que perdura en el tiempo, por lo que éste continúa consumándose hasta que culmina la situación antijurídica. Sin embargo Zaffaroni interpreta que en estos casos, cuando una ley más gravosa entra en vigencia en un momento posterior al comienzo de la acción, existe un tramo de ella que no está abarcado por la nueva ley, salvo que se haga una aplicación retroactiva de ella, lo que le lleva a aplicar la vigencia al momento del inicio de la acción"*. (Zaffaroni, Alagia y Slokar, Derecho Penal, Parte General, op.cit. p. 122/123)".

El *"delito permanente es aquel comportamiento único que inicia la vulneración o puesta en riesgo del bien jurídico y, sin solución de continuidad, mantiene en el tiempo la ofensa a ese interés hasta cuando el autor, por voluntad propia, deja de lesionarlo, o hasta cuando por otra razón, por ejemplo, la muerte de la víctima, su huida, el arresto del agente o la clausura de la instrucción, desaparece*



*el daño o el peligro al interés o valor tutelado. Ese delito, de otra parte, dentro de selecta doctrina ha sido concebido mayoritariamente como una pluralidad de actos seguidos, continuos, que integran una sola singularidad, es decir, una sola conducta o, si se prefiere, un sólo delito".*

*"Es evidente que en materia de aplicación de la ley más favorable frente a delitos permanentes, la doctrina no es totalmente uniforme, y que inclusive dentro de quienes afirman la unidad del delito permanente hay unos que consideran que solamente se debe tener en cuenta la ley que rige al momento en que es realizado el último acto. La conclusión más jurídica, sin embargo, es la otra: si se trata de un delito único, no es posible desmembrarlo para efectos de la aplicación de la ley, como si fuera una mera pluralidad de acciones u omisiones o si se tratara de varios delitos".*

"En su obra Código Penal y Normas Complementarias. Análisis Doctrinal y Jurisprudencial, David Baigún y Eugenio Raúl Zaffaroni, anotan como comentario al artículo segundo del Código de fondo: El primer tópico se vincula con el tiempo en el cual el





## Poder Judicial de la Nación

### TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE MAR DEL PLATA

delito se considera cometido (36, t. II, p. 641) particularmente en lo atinente a los llamados delitos permanentes, sobre los cuales Jiménez de Asúa se expide por la solución propuesta por Liszt-Schmidt, quienes al considerar a esa infracción como un delito único, postulan la tesis que resuelve la impunidad final de aquella actividad que, al comenzar a desplegarse, no estaba contemplada como delictiva por el ordenamiento jurídico, pero luego, durante su prolongado desarrollo, se promulga una ley que la incrimina, no obstante lo cual, su autor persiste en su actitud".

La fiscalía de juicio invocó la doctrina que fluye del fallo *Muiña* de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (340:549) que estableció, según su criterio que compartimos, el alcance del principio de aplicación de la ley más benigna (art. 2 del Código Penal) respecto de este tipo de delitos permanentes.

En ese precedente, el Máximo Tribunal de la Nación dijo que *"es indisputable que la solución más benigna debe aplicarse a todos los delitos, inclusive los de carácter permanente, sin distinciones [] la característica definitoria de los delitos permanentes es que ellos se cometen durante cada uno de los*



*segmentos temporales del lapso que transcurre desde que el imputado comenzó a desplegar la conducta típica hasta que cesó de hacerlo. Dicha característica en modo alguno inhibe la posibilidad de que durante el transcurso de la acción pero antes de pronunciarse el fallo se dicte una ley más benigna y, con ello, se configuren las únicas condiciones a las que la norma referida supedita la aplicación de la ley más favorable"* (considerando 9).

A renglón seguido "la interpretación adecuada del art. 2° del Código Penal es que resulta también aplicable a los delitos permanentes. En efecto, si el legislador, a quien le compete realizar las distinciones valorativas que pudieran corresponder, hubiera considerado que el art. 2° del Código Penal no debía aplicarse a los delitos permanentes por cualquier razón, habría hecho la salvedad pertinente que no hizo y que el Poder Judicial, en virtud de la materia que aquí se trata penal no puede hacer. Más aún, cuando el legislador quiso estipular como relevante algún momento en especial de todos aquellos durante los cuales los







## Poder Judicial de la Nación

### TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE MAR DEL PLATA

*delitos permanentes son cometidos lo hizo de modo explícito. En ese sentido, el art. 63 del Código Penal, por ejemplo, establece que en los delitos permanentes para determinar cuándo comienza a correr el plazo de la prescripción, debe tenerse en cuenta el momento en el que cesan de cometerse. Debe recordarse que esta Corte tiene dicho que la inconsecuencia en el legislador no se presume (Fallos: 304:1820; 306:721; 307:518; 315:2668, entre tantos otros), de manera que no pueden caber dudas sobre la plausibilidad de las consideraciones precedentes"*

*(considerando 10).*

*Y culmina afirmando que "si existiese alguna duda respecto de la aplicabilidad del art. 2 del Código Penal a delitos como el castigado por la sentencia cuya validez se discute en autos, esta debe resolverse en favor del imputado debido a que en el proceso interpretativo en materia penal debe acudirse a la norma más amplia, o a la interpretación más extensiva, cuando se trata de reconocer derechos protegidos e, inversamente, a la norma o a la interpretación más restringida cuando se trata de*



establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos. Del principio de legalidad (art. 18 de la Constitución Nacional) se deriva la exigencia de resolver las dudas interpretativas en la forma más restrictiva dentro del límite semántico del texto legal, en consonancia con el principio político criminal que caracteriza al derecho penal como la última ratio del ordenamiento jurídico (conf. considerando 23 del voto de los jueces Highton de Nolasco y Maqueda en "Arriola", Fallos: 332:1963)".

Similar interpretación la brindan la Convención Americana sobre Derechos Humanos -Pacto de San José de Costa Rica-, en su art. 9 y el art. 15.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos por cuanto dentro de sus principios establecen la prohibición de condenar por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable, ni imponerse una pena más grave que la aplicable al momento de comisión del delito y el beneficio de una pena más leve en caso de disponerse con posterioridad.

En suma, de conformidad con lo dictaminado por el representante del Ministerio Público Fiscal, hemos de decir que los comportamientos endilgados a





Poder Judicial de la Nación

## TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE MAR DEL PLATA

los imputados en orden al delito de asociación ilícita fiscal, anteriores al mes de enero de 2004, resultan atípicos.

Y dicha situación emana de uno de los principios rectores del Derecho penal, y no es otro que el principio de legalidad (*nullum crimen nulla poena sine lege*) ya que, conforme el art. 18 de la Constitución Nacional: "*Ningún habitante de la Nación puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso...*", el cual se complementa con el art. 19 de dicha carta magna que señala: "*Ningún habitante de la Nación será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe*".

En similar sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos señaló: "*El principio de legalidad, según el cual 'nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable'* (art. 9 de la Convención Americana), constituye uno de los elementos centrales de la persecución penal en una sociedad democrática" (CoIDH, "*Norin Catrimán y otros vs. Chile*", del 29 de abril de



2014, párr. 161, con cita de los precedentes del tribunal en casos "Baena vs. Panamá", párr. 107, y "Mohamed vs. Argentina", párr. 130).

La ley penal debe ser previa, escrita, cierta y estricta y en lo que aquí interesa, como bien señala Aboso "1) *La ley penal debe ser previa, en consecuencia, ella rige hacia el futuro y se prohíbe su aplicación retroactiva a hechos del pasado no punibles...Existe un deber constitucional para el legislador de precisar tanto los hechos punibles como las consecuencias jurídicas (sanciones) anudadas a dichos comportamientos.*" (Aboso, Gustavo Eduardo, Código Penal de la República Argentina, Comentado, concordado con jurisprudencia, 5° edición, 2018, Buenos Aires, pág. 5).

Ésta es la única respuesta constitucional posible al caso, a lo que cabe agregar que, la acusación pública debe ser tomada como un todo, sin posibilidad de desmembrar, acortar o modificar el tiempo en el cual habría operado la presunta asociación ilícita fiscal ya que, de entenderlo así, se estaría alterando la plataforma fáctica sobre la cual giró todo el proceso incurriendo claramente en una violación al derecho de defensa en juicio al





## Poder Judicial de la Nación

### TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE MAR DEL PLATA

cambiar sorpresivamente a los imputados las reglas del juego hasta aquí impuestas.

Por todo lo expuesto, y de conformidad con lo postulado por el Representante del Ministerio Público Fiscal corresponde decretar el sobreseimiento de Eduardo Miguel Aracil, Pedro Eugenio Del Buono, Mauricio Héctor Kennis, José Luis Gallinal, Micaela Aracil y Miguel Àngel Gabbin, Mara Labaroni, Eladio Walter Aquino, Roberto Obertti, Emilio Manuel Carabajal, Horacio Gutemberg González y Gloria Graciela García en orden al delito de asociación ilícita tributaria (art. 361 del CPPN y art. 15 inciso "c" texto según Ley 27.430 a *contrario sensu*).

#### **VII.**

Sentado cuanto precede, y en lo que respecta a la presentación del Sr. fiscal general Dr. Juan Manuel Pettigiani de fs. 9892 -punto VII- vinculado con el delito de evasión del impuesto al valor agregado del período fiscal año 2013 por la suma de \$2.092.842.97 (art. 2 inciso "b" de la Ley 24.769 en función de esa misma ley), habiéndose expedido la querella AFIP a fs. 9897 en los términos del art. 16 de la Ley 27.430, córrase vista al acusador público tal lo solicitado por dictamen de fs. 9898 y habida



que sea la respuesta, otórguese mismo trámite para el Dr. Marcelo Savioli Coll defensor de los intereses de los encausados Eduardo Aracil, Pedro del Buono y Mauricio Kennis.

Por ello, el Tribunal,

**RESUELVE:**

**1. SOBRESEER** a Eduardo Miguel Aracil, Pedro Eugenio Del Buono, Mauricio Héctor Kennis, José Luis Gallinal, Micaela Aracil y Miguel Àngel Gabbin, Mara Labaroni, Eladio Walter Aquino, Roberto Obertti, Emilio Manuel Carabajal, Horacio Gutemberg González y Gloria Graciela García, todos ellos de las demás condiciones personales obrantes en autos, en orden al hecho que fuera subsumido en el delito de asociación ilícita tributaria (art. 361 del CPPN y art. 15 inciso "c" texto según Ley 27.430 a *contrario sensu*).

**2. CORRER VISTA** al acusador público respecto del informe elaborado por la querella AFIP a fs. 9897 en los términos del art. 16 de la Ley 27.430 (-punto VII- vinculado con el delito de evasión del impuesto al valor agregado del período fiscal año 2013 por la suma de \$2.092.842.97 y habida que sea la respuesta, siendo que deberá imprimirse mismo trámite para para el Dr. Marcelo Savioli Coll -defensor de los intereses





Poder Judicial de la Nación

TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE MAR DEL PLATA

de los encausados Eduardo Aracil, Pedro del Buono y  
Mauricio Kennis-.

Regístrese, notifíquese y ofíciense.

MARTÍN LUCIANO PODERTI  
JUEZ DE CÁMARA

ROBERTO FERNANDO MINGUILLON  
JUEZ DE CÁMARA

SEBASTIÁN LUIS FOGLIA  
JUEZ DE CÁMARA

Ante mí:

CARLOS EZEQUIEL ONETO  
SECRETARIO FEDERAL



#37386640#401039135#20240410120311620